



Planta híbrida eólica y fotovoltaica en España

# España paga la luz un 10% más cara que la media europea

► El precio final es el sexto más alto de la UE por los costes tras el apagón y la fiscalidad eléctrica

H. Montero. MADRID

España paga la electricidad más cara de lo que sugieren las apariencias. Aunque el flamante vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se vanagloriaba de que gracias a la penetración renovable de marzo la inflación había logrado contenerse hasta «solo» el 3,3% ya que la generación «verde» fijó el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019, lo cierto es que todo es una ilusión. Un espejismo que no tiene en cuenta el impacto de los impuestos del Gobierno ni el poder adquisitivo.

Porque el precio final que abonan los hogares, con todos los impuestos incluidos y medido en euros ajustados por paridad de poder adquisitivo, se sitúa en 0,32 euros el kilovatio hora.

Es un 10% superior a la media de la Unión Europea y coloca a España como el sexto país con la

luz más cara del continente.

El dato choca con la salmodia gubernamental de que la transición renovable ha abaratado la energía final. En origen, así debería ser, pero la carga fiscal que arrastra la generación eléctrica infla los precios – como en el caso de los carburantes – y engorda las arcas del Fisco.

España ha acelerado como pocos países europeos en el despliegue de energía solar y energía eólica. El «mix» eléctrico ha cambiado de forma profunda en apenas una década. La generación renovable ya supera más de la mitad de la producción anual. Sin embargo, la factura final no baja y hay tramos donde sube.

El motivo no está en el sol ni en el viento. Está en todo lo que no se ve de primeras en el recibo.

Y es que en el precio de la electricidad no se incluye solo lo que cuesta producirla. También figura lo que cuesta hacer que esté

**0,32 euros el kilovatio hora fue el coste de la luz en 2025 con impuestos y en términos ajustados**

disponible en cada segundo del día. Y ahí entra un sistema complejo de peajes, cargos regulados, impuestos, inversiones en redes, servicios de ajuste y, sobre todo, respaldo. Para evitar otro apagón como el del pasado 28 de abril, del que pronto se cumplirá un año sin que los españoles sepan aún quién tuvo la responsabilidad última del «cero eléctrico», existe un blindaje que hay que pagar con la máxima de que cuando no hay sol o el viento cae, el sistema no se detiene. Se activa el gas, la hidráulica o la nuclear. Y mantener esa capacidad de respuesta tiene un coste.

Un informe del Centro Peter Huber de la Universidad de las Hespérides apunta a que el sistema eléctrico europeo está mal medido desde sus cimientos.

La política energética ha estado demasiado tiempo condicionada por el coste nivelado de la electricidad (LCOE), que calcula cuánto cuesta producir un megavatio hora a lo largo de la vida útil de una instalación.

Eso no incluye el coste de integrar esa energía en la red, ni su impacto en la estabilidad, ni la creciente necesidad de respaldo cuando la ingente producción renovable cae a cero en ciertos momentos. Y ese vacío de cálculo termina trasladándose al consumidor final.

El resultado es una electricidad que puede ser barata en origen, pero que se encarece según fluye hacia los enchufes. La cuestión ahora es si, con esta situación, podemos permitirnos el apagón nuclear que arranca en un año.